

LASA/Oxfam America 2019 Martin Diskin Memorial Lecture

por el Padre **José Alberto Idiáquez Guevara, S.J.**, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA),
Managua

Quiero iniciar expresando mi profundo agradecimiento al Comité 2019 del premio *Martin Diskin Memorial Lectureship* por haberme otorgado este especial reconocimiento. Conozco muy bien a la primera persona que lo recibió en 1998, el P. Ricardo Falla, y para mí es un inmenso honor formar parte de este grupo de personas comprometidas con el activismo y el saber. Desde luego, no estaría recibiendo este galardón si no fuera por las dos personas que me nominaron: la Dra. Irina Carlota Silber, de City College of New York, y la Dra. Serena Cosgrove, de Seattle University.

Sin querer pretender falsa humildad, quiero expresarles que vengo a recibir este premio en nombre de los jóvenes asesinados, los presos políticos, los desaparecidos y las madres de cada uno de ellos. Para mí, este premio es de ellos.

Una razón por la cual estoy aquí recibiendo este honor es porque he permanecido en Nicaragua hasta el día de hoy, trabajando como Rector en la Universidad Centroamericana. En ese sentido, he estado presente durante lo que podría considerarse como la peor crisis que ha sufrido la UCA desde su fundación, y una de las peores crisis que ha sufrido el país en toda su historia. Desafortunadamente, esta situación no es algo inusitado en mi vida. En enero de 1989 la Compañía de Jesús me retiró de El Salvador, donde me encontraba trabajando con comunidades marginadas. Mis compañeros que se quedaron en el país ya no están con nosotros.

En noviembre de 1989 fueron asesinados seis de mis compañeros y maestros jesuitas, y mis amigas Elba y Celina, en el campus de la UCA de El Salvador. De aquel hecho tan doloroso, y con una mirada evangélica e ignaciana, he sacado lecciones que guían mi labor en la UCA de Nicaragua.

En primer lugar, aquel crimen se convirtió para mí en una muestra más de cómo se asesina a quien busca la verdad. Asesinaron al justo: fue así de sencillo. Fue un ex-alumno del colegio de los jesuitas en San Salvador, el Externado San José, el teniente Espinoza, jefe del Comando Atlacatl, quien dio la orden de disparar a los sacerdotes. Un mes después de haber participado en el asesinato, Espinoza llegó a saludar a los jesuitas de la comunidad del que había sido su colegio. Ocho días después aparecía en los medios asumiendo su responsabilidad en el crimen. En el colegio tenemos alguna foto del padre Segundo Montes entregando el diploma de bachiller a quien años después lo asesinaría.

Rememoro esta tragedia porque es importante asumir que la educación no tiene como objetivo preparar ni para el éxito, ni para el prestigio, ni para la competencia. Prepara para buscar mayor eficacia en la construcción de una sociedad más justa.

Otra lección que saqué del asesinato de nuestros compañeros fue recordar cuán fuertemente fueron criticados por todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Ellos decían lo que tenían que decir desde su posición académica, sabiendo que era imposible quedar bien con todo el mundo en un contexto de tanta violencia, de tanto empobrecimiento, de tanta polarización política. Eran conscientes de lo que les podía suceder. Años antes, en marzo de 1977, otro jesuita, el padre Rutilio Grande, ya había sido asesinado en la parroquia campesina de Aguilares y en los años siguientes otra docena de sacerdotes había perdido la vida por ser fieles a su compromiso con el humanismo cristiano y con el acompañamiento del sufrimiento humano de sus compatriotas.

Algunas de las personas que criticaban severamente a mis compañeros jesuitas, en cuanto inició la ofensiva final de la guerrilla y los combates se trasladaron a la capital, huyeron buscando asilo en organismos internacionales y embajadas, mientras los jesuitas y nuestras dos amigas se quedaron en el lugar de siempre y fueron asesinados.

En esos días las madres de los jóvenes asesinados, muchas de ellas mis vecinas y amigas, no cejaron en la búsqueda de los cadáveres de sus hijos. Recorrimos morgues, basureros, calles, buscando. Aprendí de ellas, de la valentía con la que enfrentaban su dolor. Su inquebrantable tenacidad es algo que quedó marcado de forma indeleble en mi mente y mi corazón.

El padre Amando López, uno de mis hermanos asesinados, también fue rector de la UCA de Nicaragua entre 1979 y 1983. Fue mi profesor de filosofía en quinto año de bachillerato y mi acompañante espiritual cuando decidí entrar en la Compañía de Jesús. Después fue mi profesor de teología y mi director espiritual mientras estudiaba en la UCA de El Salvador. Amando me enseñó a pensar desde la perspectiva de los pobres de la tierra y a asumir con humildad y con dignidad mi identidad de clase. El libro base para nuestra clase de filosofía era "Pedagogía del oprimido", de Paulo Freire. Diez meses antes de que lo mataran, cambiaba yo impresiones con él sobre las críticas que estaban recibiendo y él me decía: "Lo importante es mantenernos fieles al Evangelio y no defraudar la causa de los pobres. Nos vendrán más críticas y cada vez más fuertes. No te olvides que estamos viviendo en una guerra y eso significa ser atacados más que recibir honores". Estar al lado de los excluidos de este mundo implica muchas veces ser tenido por loco o idealista.

Después del brutal impacto que me causó el asesinato de mis hermanos, la forma en que los mataron, después de experimentar mucha incertidumbre y confusión, alguna certeza empezó a invadir mi caminar. Nada mejor para expresarla que las palabras del obispo de la Amazonía, Pedro Casaldáliga, en su libro "Descalzo sobre la tierra roja". Confiesa Casaldáliga:

"Cada vez estoy más confuso y al mismo tiempo más seguro. Sea en materia de economía y política, sea en materia de inculturación y de religión. Estoy más confuso en el sentido de que veo más de lo que veía, siento exigencias que no sentía, reconozco errores que antes no percibía... En este sentido estoy más confuso, porque descubro cada día más mundos, más horizontes, más caminos y más contribuciones que desconocía. Pero también me siento cada vez más seguro porque lo fundamental lo veo cada vez más fundamental, y uno de los principios que ahora me orientan más y me satisfacen es: relativizar lo que es relativo y absolutizar lo que es absoluto. Todo es relativo excepto Dios y el hambre. Y cuando digo "hambre" quiero decir la vida humana. En la palabra hambre englobo todas las necesidades básicas y fundamentales de la vida humana".

Este mensaje de Casaldáliga impacta a quienes trabajamos en el mundo académico. En definitiva, nos invita a pensar en cuál es el sentido de estar en las aulas, de investigar, de contribuir a generar pensamiento.

Otra lección duradera del asesinato de mis dos amigas y mis seis compañeros es que cuando asumimos un compromiso con seriedad y queremos llegar hasta las últimas consecuencias, no hay espacio ni para el victimismo ni para el fatalismo. En la pedagogía que nos enseñó Ignacio de Loyola, la primera condición para poder resistir con dignidad es no permitir que la maldad del mundo destruya en nosotros el espíritu de humilde agradecimiento para no dejarnos atrapar por la lógica de la violencia o por el resentimiento. El padre Pedro Arrupe, quien fuera nuestro superior general de 1965 a 1983, decía: "Cuando el odio del otro origina el nacimiento del odio en nosotros, somos nosotros los vencidos, a pesar de que consigamos aplastar al adversario". Y esas palabras, para mí, reflejan la gran lección que nos está dando el pueblo autoconvocado en Nicaragua: la rebelión cívica y pacífica que hemos visto, que se resiste a dejarse arrastrar por la lógica de la violencia a pesar de enfrentarse permanentemente al odio aplastante del régimen opresor.

¿Qué pasaba antes de abril en Nicaragua?

En abril de 2018 Nicaragua vivió una rebelión ciudadana espontánea e inesperada para el gobierno y para todos. Sus expresiones fueron mayormente pacíficas, cívicas y sin líderes visibles. Fue la juventud de las principales ciudades del país la que se rebeló contra el gobierno.

Desde fuera parecía que en Nicaragua las cosas iban bien. La economía, siempre dentro del modelo neoliberal, funcionaba, y no había la violencia que hay en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Quienes vivíamos en Nicaragua sabíamos que las cosas no iban bien y presentíamos que iban a acabar muy mal. La preocupación tenía sustento en el rumbo que llevaba el país desde el regreso al gobierno de Daniel Ortega, su esposa y sus allegados.

Tras unas elecciones de dudosos resultados en noviembre de 2006, Ortega comenzó a aplicar métodos de control social y político que fueron derivando en una dictadura institucional.

En su primer mandato (de 2007 a 2011) abundó la millonaria cooperación petrolera venezolana. Los millones del favorable crédito petrolero no pasaron por el presupuesto de la república, de ellos nunca hubo rendición de cuentas. Ortega los privatizó. Con esos recursos palió la pobreza de algunos grupos sociales, desarrolló una estrecha alianza con el capital nacional tradicional y acrecentó su fortuna familiar y la de su círculo más cercano en una variadísima gama de negocios (hoteles, publicidad, canales de televisión...). El más lucrativo era el de la importación y distribución de los combustibles.

En las elecciones municipales de 2008 Ortega quiso ganar el mayor número de alcaldías. Asistimos al primer gran fraude electoral, el mejor documentado en el país, con el cual inauguró su camino a la dictadura.

Paso a paso Ortega comenzó a someter a todas las instituciones del Estado a la voluntad del Ejecutivo, a su voluntad personal. A la vez, Rosario Murillo, que controlaba la comunicación del gobierno y

todo el gabinete social, incrementaba su poder de decisión. La primera institución que colapsó, y se demostró plenamente en el fraude de 2008, fue el Poder Electoral. La Corte Suprema, la Contraloría, la Fiscalía, fueron poco a poco controladas por favores y prebendas. Hoy, 24 instituciones conocidas como "entes descentralizados", que pertenecen al Ejecutivo, carecen de autonomía y son Ortega y Murillo quienes deciden todo lo que en esas instituciones se hace o deshace.

Las elecciones presidenciales de 2011, que fueron un nuevo fraude, resultaban importantes pues su objetivo era, además de retener la Presidencia, conseguir la mayoría absoluta de diputados en el Poder Legislativo. Así le garantizarían la aprobación de leyes con prácticamente nulo debate y sin consultas. Sobre todo, le permitirían reformar la Constitución, la Ley del Ejército y la Ley de la Policía, como en efecto lo logró en su segundo mandato (de 2011 a 2016). Además de la reforma de la Constitución, causó especial preocupación la resolución judicial amañada que le garantizó la Corte Suprema para permitir la reelección indefinida.

También preocupó la aprobación, sin consulta y en tiempo record, de la ley de la concesión canalera (en 2013). Por esta ley la soberanía nacional quedaba prácticamente en manos de un desconocido empresario chino que iba a construir un canal interoceánico por Nicaragua. El proyecto, de haberse realizado, hubiera causado una catástrofe ambiental. La ley existe y nadie conoce qué consecuencias traerá para nuestro país.

Este polémico proyecto motivó el movimiento de protesta más consistente en Nicaragua antes de la rebelión de abril. Fue un movimiento ciudadano de campesinos y campesinas que vivían en la zona de la ruta canalera y que serían expropiados de sus tierras. Se organizaron en el Movimiento en Defensa de nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, realizando más de un centenar de movilizaciones en la zona y llamando la atención internacional.

Ortega llegó a 2016, año en que habría nuevas elecciones presidenciales y legislativas, con un control prácticamente absoluto del Estado, pero con algunas limitaciones que no había tenido hasta

entonces. La cooperación petrolera venezolana venía reduciéndose por la crisis en Venezuela y era evidente el descontento en la sociedad por el exceso de control en todos los ámbitos de la vida.

Conseguir un empleo, una beca, una resolución judicial justa, un permiso, cualquier trámite en cualquier entidad del aparato estatal, dependía cada vez más del aval de los secretarios políticos del partido de gobierno en los municipios y en los barrios de las ciudades. La gente comenzaba a sentirse temerosa por la creciente indefensión ante las instituciones del Estado. La confusión Estado-Partido-Familia era evidente en la vida política y económica del país.

El sistema educativo empezó a debilitarse por decisiones políticas. Y en un país con un porcentaje muy grande de personas que no cubren sus necesidades básicas, era fácil que el poder las hiciera sentirse más como objetos de dádivas y favores que debían agradecer, que como sujetos de derechos que el Estado debía respetar y garantizar.

Las Comisarias de la Mujer, uno de los más importantes avances conseguidos en años anteriores, desaparecieron. La Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, otro avance importante, fue alterada. Y desde el poder se ordenó no hablar más de “violencia contra las mujeres”, sino de “desentendimiento familiar”.

Cualquier manifestación de descontento era reprimida. Los campesinos anti-canal eran especialmente perseguidos. Y el modelo de “diálogo y consenso” de Ortega con el gran capital nacional les garantizaba, también a los inversores internacionales, que en sus empresas nunca habría huelgas y que podrían pagar los salarios más bajos de Centroamérica. En las zonas rurales del Norte había grupos de rearmados con motivaciones políticas. Muchos de sus líderes, calificados como delincuentes, fueron siendo eliminados por el Ejército en ejecuciones extrajudiciales. Y en la Costa Caribe la población indígena nunca dejó de sufrir muertes, desplazamientos y la continua invasión y despojo de sus tierras ancestrales. Esto me consta por los años de trabajo etnográfico que he realizado junto con comunidades garífunas.

En esta situación de control del poder y de adormecimiento o acomodamiento resignado de la población, a mediados de 2016 Ortega, preocupado por la posibilidad, no de perder la Presidencia, pero sí de perder la ventajosa mayoría absoluta en el Parlamento, tomó tres decisiones que consideramos son también antecedentes de la crisis de abril.

Valiéndose del control que tenía en la Corte Suprema, Ortega expulsó del Parlamento a todos los diputados de oposición. Al mismo tiempo proscribió a la alianza política de centro-derecha y centro-izquierda que se disponía a disputarle el poder y lograr escaños parlamentarios en las elecciones.

La tercera decisión fue elegir a su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia de la República. Demostraba así que su proyecto no sólo era autoritario y estaba en marcha una dictadura institucional, el proyecto también era dinástico. Murillo se colocaba de primera en la línea de sucesión. El “fantasma” de la dictadura dinástica de Somoza, que duró medio siglo, apareció en el imaginario nacional.

En las elecciones de 2016 asistimos a la abstención mayor de la historia electoral nicaragüense. Pudo haber llegado a un 80 por ciento de la población votante. El distanciamiento del pueblo no se puede desvincular de los niveles de corrupción y de pobreza. A medida que crecía la corrupción, se debilitaba la cultura democrática y se reforzaba la cultura de la migaja y la limosna.

El pueblo de Nicaragua, que en apenas diez años había tenido la experiencia de sacar en 1979 una dictadura (la de Somoza) por las armas y de sacar un gobierno autoritario en 1990 (el del FSLN) por los votos, tenía cerradas ambas vías: no quería volver a las armas y no lograba elegir con sus votos.

¿Qué pasó en abril?

2018 inició en un ambiente de relativa calma. Los antecedentes inmediatos a la rebelión de abril fueron dos: ambos ligados a la conciencia de la juventud millennial de Nicaragua. En marzo, Murillo anunció que las redes sociales eran nocivas y que

se dictarían leyes para regularlas. Y a inicios de abril, una amplia extensión de la reserva biológica Indio-Maíz, al sureste de Nicaragua, fronteriza con Costa Rica, empezó a ser consumida por un incendio incontrolable. La juventud ambientalista del país se manifestó en la UCA exigiendo del gobierno respuestas más decididas y urgentes, que nunca llegaron.

Cuando lo que llegó fue un diluvio, que sofocó el incendio, el 16 de abril Ortega dio luz verde a una reforma a la seguridad social —en bancarrota por malos manejos del gobierno—, que entre otras medidas reducía las pensiones de las personas de la tercera edad.

El 18 de abril las protestas por la reforma a la seguridad social fueron reprimidas con extrema violencia, como ya era habitual, por “fuerzas de choque” del gobierno, miembros de la Juventud Sandinista y “motorizados”. Lo diferente en esta ocasión fue que al día siguiente, 19 de abril, hubo más jóvenes protestando en León, Managua, Masaya y otros puntos del país. Eran jóvenes defendiendo a sus abuelos y abuelas, a los ancianos que verían reducidas sus pensiones. Estudiantes de varias universidades del país protestaban en las calles. Y comenzaba a unírseles la población.

Ese día se hizo visible el rechazo generalizado de gran parte de la población nicaragüense ante los agravios, injusticias y abusos del régimen. El rechazo se había ido acumulando a lo largo de una década. Y por fin estalló. Fue un despertar, una “insurrección de la conciencia”.

La respuesta del gobierno ante las protestas, que no pararon de crecer desde ese día en las principales ciudades del país, y en buena parte de municipios más rurales, fue una represión desproporcionada. “Vamos con todo” fue la orden que dio Murillo el 19 de abril a los secretarios políticos de todo el país. “Todo” significaba cualquier medio, por criminal que fuera, con tal de sofocar la rebelión.

Por eso, desde el primer momento, policías antidisturbios y francotiradores emplearon armas de guerra. “Disparar a matar” fue el título que en su primer informe Amnistía Internacional utilizó para relatar la letal respuesta elegida por el régimen en

los meses de abril y mayo. La represión desmedida actuó como gasolina que se echa al fuego. Y ya en abril, la imaginación empática y la indignación convirtieron la rebelión juvenil en un movimiento de alcance nacional, de gente de todas las edades y de todas las clases sociales, una rebelión con contenido político y una determinación de cambiar cosas... tan estables aparentemente hasta entonces.

La juventud universitaria fue la primera que despertó en abril. La siguió la juventud en general. A la juventud la siguió la mayoría de la población. Fueron jóvenes estudiantes quienes despertaron a un país. “¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!” fue la primera consigna que se coreó en las calles.

En Nicaragua matar universitarios significa matar el sueño de las familias pobres. Tener un hijo o una hija universitaria es la ilusión más acariciada por los pobres. Para lograrlo ahorran, se empeñan, se esfuerzan. Esto es fundamental para entender el repudio que provocó que el régimen disparara contra universitarios. “Todo te dejamos pasar, pero jamás hubieras tocado a nuestros chavalos” decía una cartulina que llevaba en sus manos una mujer en la primera marcha que hubo en Managua. Desde ese cartón le hablaba a Daniel Ortega. Todo —las instituciones controladas, los fraudes electorales, la corrupción generalizada—, todo se lo dejaron pasar, pero no que matara a los chavalos, a los jóvenes universitarios.

Al despertar, Nicaragua estaba asombrada y esperanzada. El movimiento crecía, era autoconvocado, nadie lo dirigía, nadie lo organizaba. En Managua se desarrollaron en abril y mayo varias movilizaciones masivas, nunca antes vistas. Igual sucedía en León, en Masaya... por todo el país. Muy pronto, los campesinos organizados en la lucha anti-canal encontraron en el levantamiento de tranques en las carreteras su forma de aportar a las protestas. Los pobladores de las ciudades replicaron el método y a mediados de mayo buena parte de la circulación vehicular estaba en dificultades por todo el país.

La marcha del Día de las Madres, 30 de mayo, en Managua fue la movilización más grande conocida en el país. Medio millón de personas de todas las edades recorrieron unos 10 kilómetros de la

capital de forma pacífica. Los disparos que ese día segaron la vida de una docena de jóvenes, en las inmediaciones de la UCA, marcaron el inicio del terror. Ese día, tan especial cada año en Nicaragua, sentimos que el régimen no conocería ni límites ni escrúpulos para sofocar la rebelión ciudadana.

Uno de los símbolos más poderosos de este momento histórico de Nicaragua, en correspondencia con el papel central que la Madre ha tenido siempre en Nicaragua, son las mujeres madres de los asesinados reclamando justicia y las madres de los encarcelados exigiendo su libertad. Tienen una fuerza enorme sus testimonios, su valentía, su presencia, su determinación. No es gratuito que el régimen decidiera atacar la marcha del Día de las Madres. Disparar ese día llevaba el mensaje del “vamos con todo” con que había iniciado la represión.

Ya desde el 22 de abril Ortega había retirado la reforma a la seguridad social y llamado a un diálogo nacional solicitando que los obispos fueran sus mediadores. El 16 de mayo inició el diálogo. Apenas duró hasta el 23 de junio. Fue más un ejercicio “de reconocimiento televisado” de las dos fuerzas en pugna: el régimen y los azul y blanco.

Las sesiones del diálogo evidenciaron la falta de voluntad política del régimen para lograr una salida que significara un cambio democrático. Fue en el diálogo cuando el régimen comenzó a calificar lo ocurrido de “golpe de Estado”, manteniendo hasta hoy esa interpretación de lo ocurrido.

Durante el diálogo, el régimen inició la llamada “operación limpieza” para derribar los tranques y barricadas que por centenares había por todo el territorio nacional. Policías uniformados y armados con armas de guerra, acompañados de parapolicías, hombres de civil y encapuchados, desarrollaban operativos militares propios de un ejército de ocupación. Sucedió así en Masaya, en Jinotepe, en Diriamba, en Jinotega . . . La “limpieza” culminó a mitad de julio y dejó decenas de personas ejecutadas y decenas de detenidas por haber llevado alimentos a los tranques, por haber curado heridos, por haber participado en esta forma de protesta territorial.

A pesar de todo, si el diálogo no consiguió ningún acuerdo para detener la represión ni para responder a las demandas ciudadanas de democracia, sí tuvo un logro de extraordinaria importancia: la llegada a Nicaragua en mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA. Y en junio, la llegada del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos organismos de la OEA. También llegó ese mes la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Los informes elaborados por estos organismos, investigando y documentando lo que había pasado en Nicaragua hasta que en agosto (OACNUDH) y en diciembre (MESENI y GIEI) fueron expulsados del país, abrieron los ojos del mundo a la tragedia nicaragüense.

¿Qué está pasando hoy?

Estamos en un callejón de muy difícil salida. En un país de unos 6 millones de habitantes, gobernado con mano de hierro por dos personas señaladas de cometer crímenes de lesa humanidad según el informe del GIEI, que permanecen aferradas al poder, sin voluntad alguna de cambio, negando los hechos que ocurrieron en abril, calificándolos obcecadamente de “golpe de Estado fallido”.

Según la CIDH unas 325 personas han perdido la vida en este alzamiento ciudadano. El número de heridos se calcula en unos 4 mil, pero pueden ser muchos más. Muchos quedarán con discapacidades de por vida. No es posible precisar el número de personas desaparecidas. Se calcula en 60 mil las personas que han tenido que exiliarse forzosamente para salvar sus vidas de una represión que no ha cesado ni un solo día. La mayoría ha huido a Costa Rica, que ha actuado con una solidaridad que nunca agradeceremos suficientemente. Capturadas, apesadas y acusadas de terrorismo han sido incontables.

Hoy, más de 600 personas permanecen en las cárceles del país, siendo torturados y en condiciones infrahumanas una buena mayoría. El 16 de mayo, al año de comenzar el primer Diálogo Nacional, fue baleado por la espalda en la Cárcel Modelo de Tipitapa, Eddy Antonio Gómez Praslin.

Llevaba más de cinco meses encarcelado, acusado de “terrorismo”. Su verdadero delito fue unirse a las protestas de la juventud en Matagalpa. “Yo lucho por ustedes porque mi tiempo ya pasó”, les decía a los muchachos. Diecisiete presos políticos resultaron heridos en ese ataque. El saldo de sangre resulta desmesurado para tan corto espacio de tiempo y en un país tan pequeño.

Esto no fue un golpe de Estado. Nunca aparecieron los planes del grupo golpista, que tampoco nunca nadie ha identificado. Así lo han reafirmado los organismos internacionales de derechos humanos: no hay evidencias de que la interpretación oficial sea la correcta. Tampoco fue un golpe financiado por Estados Unidos contra un gobierno de izquierda. Las relaciones de Ortega con Washington durante una década fueron muy cordiales. El gobierno de Ortega era de clara orientación neoliberal... aunque con una retórica anti-imperialista. Nicaragua estaba abierta a las transnacionales, la minería extractiva avanzaba aceleradamente. El control de la familia Ortega Murillo garantizaba estabilidad en comparación con los países del triángulo norte.

Lo que pasó en abril fue totalmente imprevisible, también para Estados Unidos. En año y medio la población nicaragüense no dudó más. Despertó y decidió luchar por un cambio. Aunque desde hace años pensamos que esto iba a “acabar mal”, nunca sospechamos el nivel de criminalidad, crueldad y saña que el régimen Ortega-Murillo y sus seguidores llevaban dentro.

Después de un año de haber iniciado esta lucha, la sociedad nicaragüense está herida y dañada muy profundamente. En una sociedad con familias numerosas no hay nadie que no haya llorado a un muerto o a un capturado... También es una sociedad dividida, porque aunque es una mayoría la que repudia a la pareja gobernante, también hay sectores fanatizados por lealtad y admiración a Ortega —no a Murillo— y sectores que reciben prebendas por colaborar con la represión.

Después del dolor por los asesinados, el dolor más extendido en el país es el de las familias con presas y presos políticos. El tiempo ha demostrado

que la cantidad de los encarcelados responde a convertirlos en rehenes de Ortega, fichas para cualquier negociación.

A todos los presos políticos se les han violentado todos los derechos que les garantiza la ley. Fueron capturados por autoridades policiales sin orden judicial o fueron secuestrados en sus casas o en lugares públicos por civiles armados que operan con los policías. Se les ha violentado el derecho a la presunción de inocencia, presentándolos ante los medios como delincuentes, sin pruebas y sin pasar por los tribunales. Retenidos por más tiempo del que ordena la ley (48 horas) para presentarlos ante un juez, todos han pasado semanas o meses encarcelados.

El maltrato y las torturas al interior de las cárceles ha sido el patrón: interrogatorios en la madrugada, amenazas, reclusión en aislamiento, con falta de sol, de luz, de ventilación, de suficiente agua, de alimentación adecuada, de atención a problemas de salud. Y también, golpizas, humillaciones, uñas arrancadas, violaciones sexuales . . .

Un año de crisis política y social ha derivado en una aguda crisis económica que mantiene a Nicaragua en recesión técnica desde el mes de octubre. La economía se viene desplomando. Medio millón de personas ha perdido el trabajo que tenía, la inversión se ha reducido a cero, el turismo ha colapsado, se ha fugado a bancos extranjeros el 30 por ciento de los depósitos en dólares que guardaba la banca nacional. En medio de esta recesión, una reforma presupuestaria, desesperadamente recaudatoria, impuesta por Ortega en febrero de 2019 para cubrir el déficit presupuestario, profundiza el estancamiento económico. La “marca país” de Nicaragua como “el país más seguro de Centroamérica” se derrumbó.

A un año de la rebelión de abril Ortega y Murillo están derrotados, pero aún no lo aceptan. Su ilegitimidad de origen —por sucesivos fraudes— y su ilegitimidad de ejercicio, por las graves violaciones de derechos humanos que han cometido, son conocidas ya mundialmente.

Ortega se mantiene en el poder por las armas con que sus policías y paramilitares continúan capturando, asediando, y en las zonas rurales y en el Caribe matando; y por las armas del Ejército, cómplice silencioso en toda esta etapa. Ortega se ha mantenido aplicando una política de terrorismo de Estado y controlando las instituciones y las leyes, que manipula a su antojo. Con armas, leyes y funcionarios sumisos continúa imponiendo su voluntad.

Las fortalezas de la población, manifestadas durante meses en las calles de todo el país y en su capacidad de multiplicar la indignación, se han visto reducidas a la resistencia. Desde fines de septiembre, y después de realizar desde abril marchas masivas de protesta contra el régimen por todo el país, cualquier movilización fue declarada ilegal por la Policía. Los derechos a la organización, a la manifestación, a la concentración y a la libre expresión han sido cancelados de facto. Nicaragua vive hoy un estado de excepción no declarado. Impera el terror desde el poder y la población tiene miedo. O como dijo un preso político: Nicaragua es hoy un país de enterrados, encerrados, desterrados y aterrados... pero no de derrotados.

En diciembre de 2018 se profundizó la represión. En vísperas de la Navidad fueron ilegalizadas varias organizaciones de la sociedad civil (de derechos humanos, de investigación sobre políticas públicas, de atención a las mujeres...), allanadas sus instalaciones y confiscadas sus cuentas bancarias. Fueron también confiscados dos medios de comunicación de gran influencia: el sistema de medios de *El Confidencial*, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hoy en el exilio, y el de *100% Noticias*, dirigido por Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, ambos exalumnos de la escuela de Comunicación Social de la UCA, hoy aislados en las cárceles, acusados de incitar al odio por ejercer un periodismo crítico. Unos 60 periodistas nicaragüenses han tenido que huir del país, después de amenazas contra ellos y sus familias. Muchos siguen informando desde Costa Rica y Estados Unidos lo que ocurre en Nicaragua y la población los sigue por Internet.

La resistencia de la población azul y blanco, su principal fortaleza, se ha visto potenciada por la presión internacional. Además de la presión que mantienen las organizaciones de derechos humanos de la OEA y de la ONU y organismos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que informan periódicamente de lo que ocurre en Nicaragua, denunciando las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron y siguen ocurriendo, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado a funcionarios clave del gobierno de Nicaragua.

La primera sanción (Ley Global Magnitsky) le fue aplicada en diciembre de 2017 al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas. En julio de 2018, después de la sangrienta "operación limpieza" les fue aplicada la Ley Global Magnitsky al Jefe de la Policía y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, al secretario político del partido de gobierno en Managua, Fidel Moreno, y al presidente de Albanisa (contraparte de la petrolera venezolana PDVSA) y tesorero del partido de gobierno, Francisco López. Todos aparecen sancionados por graves actos de corrupción y los tres sancionados en julio por graves violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 2018 una sanción insólita afectó, por los mismos delitos y por una orden ejecutiva, a Rosario Murillo y al operador de la pareja presidencial para "trabajos sucios", Néstor Moncada Lau, con consecuencias similares a las que produce la Ley Global Magnitsky.

Las sanciones internacionales, especialmente éstas, individualizadas, han sido de enorme importancia para desgastar al régimen.

¿Qué podemos hacer?

¿Qué podemos hacer para hallar una salida a este callejón en el que nos metió la represión despiadada con que el gobierno respondió a la insurrección de abril?

Una de las características más positivas de esta rebelión es haber sido mayoritariamente cívica, ciudadana. En un país que ha vivido sus casi 200 años de independencia de guerra en guerra, que está acostumbrado a resolver por la fuerza de las armas sus conflictos, el hecho de que la mayoría de la población se haya mantenido en la convicción de

que la salida debe ser cívica es un logro enorme. Es un cambio en la realidad política nacional que hay que relevar, conservar y apoyar. Hay que mantener ese civismo, pero sin que dé ocasión a Ortega de continuar imponiéndose por la fuerza y por el engaño.

Una de las características de estos meses es que, por convicción y por necesidad, la oposición azul y blanco, la organizada y la desorganizada, ha reunido a jóvenes muy jóvenes con gente mayor, a estudiantes con empresarios, a campesinos con gente de la ciudad. De esa unidad puede salir, esperamos, un nuevo proyecto para Nicaragua. Hay que apoyar esa unidad, incentivándola.

El futuro del país, cuando todo esto pase, se vislumbra muy complicado. Nicaragua necesita de una negociación para salir de Ortega y Murillo. Pero para salir de los escombros materiales y morales de esta etapa hará falta mucho más. Es indispensable garantizar, con apoyo internacional, el desarme de los grupos paramilitares acostumbrados a actuar criminalmente y con total impunidad durante meses. Y es indispensable organizar de nuevo a la Policía Nacional.

Hará falta cooperación internacional para garantizar un auténtico proceso de justicia transicional, no conocido nunca en Nicaragua a pesar de haber vivido tantos episodios de guerra y violencia. Un proceso que, partiendo de lo ya investigado por el GIEI, asegure conocer la verdad de lo ocurrido, acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición de tragedias como la vivida desde abril. Necesitamos, como recuerda con insistencia la jurista guatemalteca Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, que “el mundo no deje de mirar a Nicaragua”. Eso es lo que necesitamos.

Desde la Universidad tenemos mucho por hacer. Desde el quehacer académico, nuestra Universidad busca el poder que tiene la verdad para así dar nuestro aporte a las transformaciones que necesita Nicaragua. Y como lo que caracteriza a la Universidad y al mundo universitario es ser el espacio en donde convive la diversidad de credos y de pensamientos, creemos que es acoger y respetar toda esa diversidad la que va a potenciar nuestro quehacer docente, nuestras investigaciones

y todas nuestras tareas de proyección social. Recordando el asesinato de mis hermanos, me interesa señalar que una formación humanista debe preparar a nuestros estudiantes para asumir el fracaso sin renunciar a sus metas y para convivir con las propias debilidades sin decepcionarse.

Ni los seres humanos, ni tampoco las instituciones, estamos exentos de limitaciones, debilidades y egoísmos. San Ignacio fue un gran visionario, pero nunca dejó de ser realista para comprometerse con lo que era viable realizar, sin desanimarse nunca por los fracasos. Y como buen maestro de la sospecha, proponía someter nuestra vida a una prueba de realidad: el proceso de discernimiento que él sugiere es un aprendizaje no sólo de los engaños del mundo, sino de las traiciones que nos hace nuestra propia mente.

Una Universidad no puede ser neutral, no puede permanecer impasible ante la dolorosa realidad. Queremos construir una comunidad en diálogo fecundo, preguntándonos siempre con libertad para qué trabajamos y al servicio de quiénes trabajamos. Bien lo sabía nuestro hermano Ignacio Ellacuría. En su último discurso, pronunciado diez días antes de ser asesinado en el campus de la Universidad Centroamericana de El Salvador, afirmaba: “Suele decirse que la Universidad debe de ser imparcial. Nosotros creemos que no. La Universidad debe pretender ser libre y objetiva, pero la objetividad y la libertad pueden exigir ser parciales. Y nosotros somos libremente parciales a favor de las mayorías populares, porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y positivamente, está la verdad de la realidad”.

El caso de Álvaro Conrado, un jovencito de 15 años, estudiante del Colegio Loyola de los jesuitas, a quien un francotirador mató de un disparo en el cuello el 20 de abril cuando llevaba agua a los universitarios que protestaban cerca de la catedral de Managua, es un caso emblemático de esta lucha. Cuando converso con su mamá, supuestamente ella en busca de consuelo en mi persona, soy yo quien sale consolado. La he visto crecer en los medios de comunicación. Una mujer tímida, callada, ahora es vocera de la junta directiva de AMA (Asociación de Madres de Abril), que por cierto tiene su oficina en la Universidad

Centroamericana. Lisbeth, como las madres salvadoreñas que buscaban los cuerpos de sus hijos, y como las madres quichés de Pueblo Nuevo en la selva del Ixcán en Guatemala, con quienes tuve el privilegio de buscar en las fosas comunes los restos óseos de los cadáveres de sus familiares, siempre guardaron la esperanza de encontrar a sus hijos y seguir luchando para que se hiciera justicia. Nunca dejaron de luchar contra un sistema perverso y excluyente para que se hiciera justicia por sus hijos, esposos, hermanos.

“Me duele respirar” fueron las últimas palabras de Alvarito Conrado al caer herido de muerte. Esa frase conmovió a todo un país. “Hoy Nicaragua respira por vos” decíamos en las marchas de mayo, en el momento de máximo entusiasmo y esperanza. “Queremos una Nicaragua en la que a nadie le duela respirar” decimos hoy pensando en el futuro. //